Propuesta de intervención en nombre del GRULAC para la 52ª sesión plenaria del CSA en el ítem sobre la Reducción de Desigualdades para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición

Señor Presidente, distinguidos colegas,

En nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), me permito comenzar destacando la relevancia central de este documento de recomendaciones políticas sobre la reducción de las desigualdades para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición.

Este esfuerzo ha sido fruto de un diálogo inclusivo y constructivo. Queremos destacar especialmente el liderazgo, dedicación y compromiso de la relatora Lara Lobo, de Brasil, quien mantuvo un dialogo permanente con todas las partes y supo encaminar las negociaciones para alcanzar el consenso que hoy nos ha permitido adoptar este documento.

La reducción de las desigualdades es, sin lugar a dudas, una condición indispensable para erradicar el hambre y la pobreza en nuestras naciones y a nivel global. Por ello reafirmamos la necesidad de abordar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos como un derecho básico cuya garantía es fundamental para combatir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. No obstante, debemos recordar que los elevados costos de los alimentos y las barreras económicas y comerciales dificultan el acceso de millones de personas a una nutrición adecuada. En este sentido, el desarrollo de políticas que fomenten el crecimiento económico inclusivo, generen ingresos, mejoren el poder adquisitivo y que permitan reducir las brechas, se vuelve imperativo. Asimismo, es crucial fortalecer los ingresos de los pequeños productores a través de políticas que incluyan protección social y acceso a mercados locales y globales.

En nuestra región, sabemos que la agricultura familiar constituye un pilar esencial tanto para la generación de empleo como para la producción de alimentos. Por ello, la agricultura familiar debe ser promovida como un motor del desarrollo rural inclusivo y sostenible. Es de suma importancia que los gobiernos fortalezcan las capacidades

productivas de este sector, asegurando acceso a insumos, financiamiento adecuado y mercados justos. En América Latina y el Caribe tenemos ejemplos exitosos de programas de alimentación escolar que incluyen productos de la agricultura familiar como centrales en las compras gubernamentales, fortaleciendo así su integración en las cadenas de suministro alimentario.

Estimados colegas,

Es preciso recordar que la creciente deuda y la carga fiscal que enfrentan muchos países profundizan las desigualdades. Como mencionó la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos en la presentación del informe SOFI 2024, la mayoría de las personas que padecen la plaga del hambre viven en países de ingresos medios o bajos, y no es la falta de compromiso lo que impide a sus gobiernos nacionales realizar las inversiones necesarias. Muchos de estos países están lidiando con cargas de deuda insostenibles. Es por ello esencial que se articulen soluciones innovadoras y de largo plazo en materia de financiamiento, que permitan a los gobiernos adoptar medidas para garantizar una alimentación adecuada. En este contexto, es crucial la cooperación internacional y los mecanismos de alivio de la deuda que proporcionen el espacio fiscal necesario para inversiones en sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles.

Otro tema central es el acceso a financiamientos. Acceder a financiamientos asequibles es un factor clave para permitir que los pequeños productores y las comunidades rurales inviertan en prácticas productivas sostenibles. En este marco, los bancos de desarrollo y las instituciones financieras internacionales deben jugar un rol proactivo, proporcionando líneas de crédito en condiciones más favorables que permitan inversiones inclusivas. Igualmente, las inversiones internacionales deben distribuirse de manera equitativa, garantizando que lleguen a los sectores y regiones más vulnerables, priorizando siempre la equidad.

Tampoco nos podemos eximir de abordar las enormes brechas de género todavía existentes. El enfoque de género en los sistemas agroalimentarios es crucial para una verdadera inclusión social. Las mujeres rurales desempeñan un papel indispensable en la producción y preparación de alimentos, pero siguen enfrentando barreras para acceder a recursos, formación y financiamiento. Las políticas públicas y las acciones privadas deben, por lo tanto, fomentar y contribuir a su empoderamiento, asegurando que participen activamente en la toma de decisiones y que tengan acceso equitativo a los medios de producción. Reducir las desigualdades de género es clave para garantizar un sistema alimentario más justo e inclusivo.

Asimismo, la inclusión de grupos históricamente vulnerables y marginalizados, tales como los pueblos indígenas, afro descendientes, personas con discapacidad, migrantes y las comunidades rurales en pobreza extrema, es fundamental en la reducción de las desigualdades estructurales. Las políticas deben ser inclusivas y permitir que estos grupos participen activamente en su diseño e implementación, asegurando una distribución equitativa de recursos y oportunidades.

Estimados colegas,

Las dimensiones de la pobreza, el hambre y las desigualdades están profundamente entrelazadas. No podemos abordar el problema del hambre sin considerar la pobreza en todas sus formas. Las políticas que se centren en la equidad, justicia, redistribución y la solidaridad son fundamentales para garantizar que nadie quede atrás y que logremos vivir en una sociedad menos desigual y más justa.

Tampoco nos podemos olvidar las especificidades culturales, geográficas y económicas de cada región. Por lo tanto, es esencial adoptar un enfoque territorial en los sistemas alimentarios. Esto no solo promueve una mayor inclusión social y cultural, sino que garantiza respuestas políticas adaptadas a las realidades locales, mejorando el acceso a recursos y mercados, especialmente en las regiones más vulnerables y marginadas.

Por último, resulta esencial destacar la relevancia de la transferencia de tecnología, el financiamiento accesible y la cooperación Sur-Sur y triangular. Estos mecanismos son fundamentales para reducir las desigualdades en la producción y distribución de alimentos, garantizando que los recursos y el conocimiento sean compartidos de manera equitativa entre los países. El financiamiento adecuado y dirigido a la innovación es esencial para avanzar hacia sistemas alimentarios más inclusivos y sostenibles.

Con base en estos principios, hacemos un llamado a los países a endosar y poner en práctica las recomendaciones políticas, y reafirmamos nuestro compromiso con un enfoque inclusivo y equitativo para garantizar el derecho humano a la alimentación para todas y todos.

Muchas gracias.